

Actualización de la línea de pobreza

Mejorar las condiciones materiales de la población, donde ocupa un lugar primordial la reducción de la pobreza, debe ser una prioridad fundamental de las sociedades modernas. Pero la condición de pobreza no es estática: no cabría esperar que la línea de pobreza que defina una democracia de US\$ 4 mil per cápita sea exactamente igual a la de una de US\$ 17 mil (el nivel actual de Chile en dólares corrientes). Y esto no solo porque se puede suponer que la definición de pobreza tiene algún vínculo con la respectiva realidad económica, sino porque los patrones de consumo y los gastos de las familias van cambiando según progresa una nación. Por eso, en Chile se ha instalado la convención de revisar esta línea cada 10 años.

Así, en estos días se ha conocido el informe de una comisión de expertos convocada por el Gobierno para redefinir la línea de pobreza a propósito de las dinámicas señaladas. La comisión ha producido un conjunto de recomendaciones, cuya evaluación corresponde ahora al Ejecutivo, lo que definirá la manera en que finalmente se hará el ajuste. En lo que se refiere a pobreza de ingresos, se proponen tres cambios fundamentales. Desde luego, y sin abandonar el criterio de partida —una canasta de alimentos—, se sugiere dejar de lado el conteo de calorías para configurar dicha canasta. En efecto, en un país de ingresos medio-altos como Chile, esa aproximación, propia de una situación de mucha deprivación, no tiene mayor sentido. De hecho, el problema actual es más bien de obesidad. Se propone, entonces, una canasta saludable, siguiendo pautas de expertos y del Ministerio de Salud. Y, se recomienda, para medir el costo de dicha canasta, reducir en 50 por ciento el consumo efectivo de alimentos ultraprocesados y sustituirlos por otros más saludables. El reemplazo parcial posibilita no alejarse tanto del consumo efectivo de los sectores más pobres.

Un segundo cambio apunta a actualizar el patrón de consumo de las familias. La actual línea se definió a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2011-2012.

Cuando la pobreza parece haber perdido prioridad en el debate público, esta nueva medición pone en evidencia su relevancia.

Ahora se emplearía la EPF de 2016-2017. Es interesante notar que existe una más actualizada, de 2021-2022, que la Comisión decidió no utilizar, porque los retiros previsionales y el ingreso familiar de emergencia entregado en ese período distorsionaron los consumos regulares. La revisión permite, aparte de construir la nueva canasta, verificar los otros gastos no alimentarios en que incurre un hogar. A partir de ello es que se construye la línea de pobreza. Ahora bien, históricamente en esos gastos se incluía un alquiler imputado que se reajustaba por el precio de los otros bienes, ignorando que los precios de la vivienda y los arriendos han subido mucho más rápido. Por ello, la línea de pobreza quedaba rezagada. Esto fue objeto de gran debate cuando se dieron a conocer las cifras de pobreza de 2022. Ahora, la comisión optó —el tercer cambio— por recomendar eliminar este concepto y tener dos líneas: una para los hogares que pagan arriendo, incluyendo el valor habitual en su zona de residencia, y otra, de menor valor, para los hogares que son propietarios.

Es una decisión prudencial que evita entrar en un cálculo complejo respecto del verdadero valor del alquiler imputado.

Todas las recomendaciones son razonables y deberían ser adoptadas sin dilaciones por el Gobierno. De aplicarse, la pobreza en 2022 —último año para el que se han publicado datos— habría sido de 22,3%, en lugar del 6,5% informado. En momentos en que la pobreza parece haber perdido prioridad en el debate público, esta nueva medición muestra que mejorar las condiciones materiales de la población menos afortunada sigue siendo un desafío fundamental. Se redobla, entonces, la urgencia de asegurar un mayor crecimiento económico, mejores oportunidades de empleo y una alta seguridad ciudadana, pilares fundamentales en la reducción de la pobreza. Asimismo, se requiere una revisión profunda de nuestros programas sociales. Estos han producido una “balcanización” de la política pública, con una efectividad muy reducida. La mayoría debería reunirse en un programa de transferencias monetarias bien diseñado que actúe como piso mínimo de ingresos para los más desvalidos.